



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

00000125



Of. 0123-2017/CGG/rdl
Guatemala, 05 de junio de 2017

Licenciado
Luis Eduardo López Ramos
Encargado de Despacho
Dirección Legislativa
Congreso de la República

Licenciado López:

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos al frente de sus funciones, al mismo tiempo y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, adjunto el **DICTAMEN FAVORABLE**, emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en conjunto a las Iniciativas de Ley número 5154 y 5156 que dispone aprobar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedo en espera de lo solicitado.

Atentamente,


DIPUTADO CORNELIO GONZALO GARCIA GARCIA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

c.c. Archivo



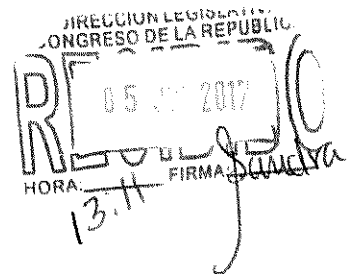
COMISION DE LEGISLACION
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATEMALA, C. A.



00000-126

Dictamen 01-2017

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

**DICTAMEN 01-2017**

**INICIATIVAS DE LEY 5154 Y 5156
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

HONORABLE PLENO:

Con fecha 6 de octubre de 2016, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, las Iniciativas de Ley identificadas con números de registro 5154 y 5156 por la Dirección Legislativa. La primera fue presentada por los Diputados Orlando Joaquín Blanco Lapola, Haroldo Eric Quej Chen y compañeros y la segunda por el Organismo Ejecutivo, en ejercicio de la función que preceptúa el artículo 183, literal g) de la Constitución Política de la República; ambas iniciativas disponen aprobar la "LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN", y fueron remitidas a esta Comisión para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Por lo tanto, considerando que las dos Iniciativas versan sobre el mismo tema, se procede a efectuar su análisis en un mismo documento de manera integrada, realizando los comentarios pertinentes a cada una de ellas.

ANTECEDENTES

Históricamente la tradición legal guatemalteca había normado las funciones del ejercicio de la acción penal pública, de asesoría legal y de defensa de los intereses públicos tanto del Estado, como de personas vulnerables sujetas a su protección, en una ley ordinaria por remisión de la Constitución Política de la República vigente en su oportunidad, atribuyéndole a una sola institución las mismas, siendo ésta el Ministerio Público.

Sin embargo, a partir de las reformas efectuadas a los artículos 251 y 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 3 de diciembre de 1993, se separan tales funciones, y se crean como instituciones individualizadas, por una parte, el Ministerio Público y por la otra, la Procuraduría General de la Nación, y



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

ordena que la organización y funcionamiento de las mismas, se regulen por su respectiva ley orgánica.

La ley vigente al momento de emitirse dichas reformas era el Decreto número 512 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual inició su vigencia el 16 de agosto de 1948, y que en su texto se refiere a una sola entidad con funciones integradas, que responde a un fundamento constitucional anterior al vigente y a una realidad legal y social diferente.

Por lo anterior, el Congreso de la República, emitió el Decreto número 40-94, que estatuye la Ley Orgánica del Ministerio Público, en vigor desde el 14 de mayo de 1994, el cual derogó el Capítulo III del referido Decreto número 512, relativo a la Sección de la Fiscalía, con lo cual se cumple lo dispuesto por el artículo 251 constitucional, no así las normas que regulan las funciones correspondientes a las Secciones de Procuraduría y Consultoría, así como disposiciones generales, las cuales continúan vigentes y que han servido de fundamento legal para las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, hasta el momento.

No obstante lo anterior, el mandato constitucional establecido en el artículo 252, sigue pendiente de cumplimiento, puesto que aunque se continúa aplicando el Decreto número 512 del Congreso de la República, en lo conducente, como ya se apuntó, tales normas se encuentran desactualizadas, por lo que no se atiende a cabalidad lo dispuesto en la norma constitucional citada.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con registros del Congreso de la República sobre el tema bajo estudio, el 23 de octubre de 1996, se presentó la Iniciativa de Ley número 1649 que disponía una modificación parcial para legitimar a la Procuraduría General de la Nación en actuaciones de cobro de impuestos, lo cual no respondía a lo requerido por la Constitución Política de la República y el 15 de marzo de 2000, se presentó la Iniciativa de Ley 2243, que proponía una nueva ley orgánica. Ambas iniciativas no concluyeron su trámite, por lo que se continúa con la necesidad de satisfacer el mandato constitucional.

En ese sentido, recientemente se presentaron las Iniciativas de Ley 5154 y 5156 que proponen una "Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación", por lo que por todo lo antes expuesto, se considera que es oportuno y conveniente conocerlas y que se legisle este tema.



00000128

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

A. ASPECTOS DE FORMA:

Las Iniciativas de Ley 5154 y 5156 cumplen con el requisito de acompañar cada una su Exposición de Motivos con las justificaciones y consideraciones de cada proyecto, en términos adecuados.

En cuanto a estructura, la **Iniciativa 5154** se encuentra dividida en 8 capítulos, que se refieren a: 1. normas generales; 2. organización de la institución en forma sintética, sin abundar en su desarrollo; 3. autoridades superiores; 4. un artículo referente a sanciones; y, 5. disposiciones transitorias. Consta nominalmente de 51 artículos, puesto que en la numeración correlativa hacen falta los artículos del 12 al 14, por lo que efectivamente figuran 48. En cuanto a aspectos de redacción, se considera que debe omitirse del nombre de la ley la frase: "INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE APROBAR LA...", que está de más y no corresponde al título de la ley.

Respecto de la **Iniciativa 5156**, está estructurada en 5 títulos, cada uno con capítulos únicos y éstos a su vez en secciones, con un total de 58 artículos, que tratan sobre lo siguiente: 1. disposiciones generales, sin embargo, cabe señalar que tales disposiciones no se refieren a lineamientos generales de la ley, sino a normas aplicables a procesos judiciales y procedimientos administrativos, por lo que se considera que deben reubicarse en la parte de la ley que se refiere a los mismos y no en el primer capítulo; 2. estructura organizacional y funcionamiento de la institución y atribuciones de las principales áreas sustantivas de la entidad en forma detallada; 3. el régimen económico; 4. un artículo sobre el régimen laboral; y, 5. las disposiciones transitorias y finales. De manera general, aunque se encuentra más desarrollada esta Iniciativa, se considera que la redacción de varios de los párrafos deben reubicarse en otra parte de la ley para que el texto sea más congruente. Asimismo, se estima que es innecesario la división en títulos del texto normativo, puesto que la extensión del mismo no lo amerita, siendo suficiente su ordenación en capítulos y secciones.

Acompaña a esta Iniciativa, copia de la opinión 426, emitida por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, por la cual opina



00006129

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

que la misma puede continuar con su trámite correspondiente pero que el referido Ministerio no asume el compromiso de otorgar asignaciones adicionales a la Procuraduría General de la Nación para financiar la Iniciativa de Ley. También obra la opinión 398-2016-DAJ de la Dirección de Asesoría Jurídica del mismo Ministerio que se pronuncia en sentido positivo por considerar que la Iniciativa cumple con los requisitos para ese tipo de documentos. Asimismo, se observa el dictamen DTPR-2016/055 de la Oficina Nacional de Servicio Civil, por el que opina favorablemente a la Iniciativa.

Por otra parte, esta Comisión socializó las Iniciativas de mérito y se obtuvo de la Corte Suprema de Justicia y de la Fundación 2020, observaciones de forma y de redacción, las cuales se tomaron en cuenta.

Por lo tanto, en cuanto a aspectos de forma, se considera que ambas Iniciativas son susceptibles de ser mejoradas, razón por la cual las observaciones de forma efectuadas se incorporarán en el proyecto integrado, adjunto al presente dictamen.

B. ASPECTOS DE FONDO:

Para el análisis de fondo respecto de constitucionalidad y concordancia con el ordenamiento jurídico se realizará por temas, efectuando las comparaciones del caso de las dos Iniciativas, señalando los artículos más relevantes de las mismas que ameriten comentarios, puesto que aunque con diferente terminología en algunos casos, el fondo de las dos Iniciativas es el mismo, por lo que no ameritan observaciones específicas, para luego arribar a las conclusiones pertinentes.

1. OBJETO:

Las Iniciativas de Ley 5154 y 5156 tienen por objeto dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 252 de la Constitución Política de la República y actualizar y fortalecer la institucionalidad de la Procuraduría General de la Nación.

2. TEMAS EN COMÚN QUE SE OBSERVAN EN AMBAS INICIATIVAS:



00000-130

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

a) Independencia funcional, técnica y administrativa.

Al respecto, la **Iniciativa 5154**, en el artículo 1 y la **Iniciativa 5156** en el artículo 2, otorgan a la institución independencia funcional, técnica y administrativa. En ese sentido, se considera pertinente para la mayor eficiencia de la entidad, que ésta pueda disponer internamente de la posibilidad de administrarse, de gestionar sus funciones y la emisión y aplicación de sus criterios técnicos.

La **Iniciativa 5156**, en el artículo 2, también menciona la independencia presupuestaria y financiera, pero se considera que en cuanto a la materia presupuestaria, no es viable puesto que la entidad de acuerdo con los artículos 38 de la **Iniciativa 5154** y 49 de la **Iniciativa 5156**, siempre dependerá del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, por lo que debe omitirse del texto la referida independencia.

b) Funciones autónomas, aunque en determinados casos conforme a la ley, deberá efectuar consultas al Presidente u órgano del Estado correspondiente.

Las **Iniciativas 5154** y **5156** en su artículo 2 establecen que la entidad tendrá funciones autónomas. En este caso cabe mencionar que el artículo 252 constitucional, no menciona este aspecto, pero manda a que su organización y funcionamiento se desarrollen en su ley orgánica.

En ese sentido, el artículo 134 de la misma Constitución Política de la República, en lo conducente establece: "...La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República, se concederá únicamente, cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas, será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de la República. ..."

Así también, el Decreto número 512 del Congreso de la República, que actualmente aplica la Procuraduría General de la Nación, en el artículo 3, en lo



00000131

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

conducente norma: "Las funciones del Ministerio Público son autónomas, salvo en los casos en que, conforme a la ley, deba atender instrucciones especiales. ..."

Y lo dispuesto por el Decreto número 25-97 del Congreso, de la República, en el artículo 1, que indica: "Salvo en materia penal, procesal penal, penitenciaria y en lo que corresponde a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y en la propia Ley Orgánica del Ministerio Público, en toda norma legal y reglamentaria en que se mencione Ministerio Público, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación."

Por lo tanto, se considera que para mejorar la eficiencia de la entidad, en el cumplimiento de sus fines, tales como la asesoría de los entes y órganos del Estado, para los cuales se requiere independencia de criterio, y acciones de tutela de personas vulnerables, que conforme los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República, le corresponde al Estado realizar, es conveniente que realice sus funciones con autonomía. En cuanto a la defensa del Estado, como medio de agilizar las acciones que pueda llevar a cabo para dicho fin, también es pertinente la autonomía en las funciones, sin embargo, dejando a salvo siempre en casos excepcionales la debida consulta a los entes involucrados y sin perjuicio de la coordinación que debe existir entre los órganos y entidades del Estado.

c) Reconocimiento del Procurador General de la Nación como Jefe de la entidad.

El artículo 252 constitucional establece. "...El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el Jefe de la Procuraduría General de la Nación. ..."

Al respecto, ambas iniciativas en el artículo 15, reconocen lo que dispone la norma constitucional en cuanto que el Procurador General de la Nación es el Jefe de la institución.

d) Derecho a solicitar información y obligación de los entes del Estado de proporcionarla.



00000132

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Para la debida atención de los asuntos y defensa de los intereses del Estado, tanto la iniciativa 5154 en el artículo 9, como la Iniciativa 5156 en el artículo 11, establecen el deber de todos los funcionarios y empleados públicos de colaborar en proporcionarle información para llevar a cabo las acciones correspondientes.

Estas disposiciones tienen antecedente en el Decreto número 512 del Congreso de la República, que en el artículo 51, en lo conducente establece: "El Procurador General de la Nación podrá pedir informes a todos los funcionarios públicos y exigirles que cooperen con él en la práctica de las diligencias que necesitare llevar a cabo en el ejercicio de sus funciones. ..."

No obstante lo anterior, se considera más adecuada la redacción del artículo 11 de la Iniciativa 5156 puesto que faculta a solicitar no solo información, sino documentos y colaboración en diligencias, así como faculta a la Procuraduría General de la Nación a fijar plazo para la presentación de información, lo cual se considera fortalecerá la actuación de la entidad.

e) Bienes que posea, forman parte de su patrimonio.

Al respecto, ambas iniciativas proponen que la institución cuente con su propio patrimonio, agregando la Iniciativa 5156 que también cuente con fondos privativos provenientes de costas judiciales, donaciones, cooperación internacional y otros, lo cual se considera conveniente para el fortalecimiento de la entidad.

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONARIOS

La **Iniciativa 5156** (Artículos 13 y 14) propone una estructura orgánica amplia y detallada, menciona funciones, atribuciones de las dependencias y requisitos y calidades de los funcionarios, aunque remite al reglamento para áreas no sustantivas y divisiones menores de la entidad, lo que admite posibilidad de crecimiento aunque la estructura básica está desarrollada en la ley.

La **Iniciativa 5154** (Art. 7), establece como causales de remoción del Procurador General de la Nación, la comisión de un delito, en cuyo caso se le suspenderá en el ejercicio de cargo a partir de la declaratoria que ha lugar a formación de causa



00601.133

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

en el trámite de antejuicio en su contra y los supuestos de negligencia e ineptitud que tiene su antecedente en el Decreto número 512 del Congreso de la República.

La iniciativa 5156 no considera casos de remoción del Procurador General de la Nación, sino que únicamente reitera lo indicado en la Constitución Política de la República, en cuanto a que podrá ser nombrado y removido por el Presidente de la República.

Con relación a lo anterior, se estima que si bien es cierto, lo dispuesto por el artículo 252 constitucional no establece causales de remoción, también lo es, que es pertinente que en la ley orgánica se establezca el tratamiento que debe dársele a ciertos casos especiales como la posibilidad de la comisión de un ilícito por parte de un funcionario como el Procurador General, para determinar el momento en que deba suspenderse del cargo, en lo que dilucida su situación, así como un procedimiento de qué hacer en otros casos, de manera que se considera que no riñe con la citada norma constitucional, el que se establezca una norma que indique el procedimiento a seguir para no violentar el derecho de defensa que constitucionalmente también le asistiría al Procurador en caso de una suspensión o remoción. En consecuencia, se considera que debe incorporarse aunque con modificaciones la norma citada de la Iniciativa 5154, al proyecto integrado que contenga estos aspectos, y que puede verse en el documento adjunto al presente dictamen.

Por otra parte, la **Iniciativa 5154** (Art.19) también establece prohibiciones para el ejercicio de los cargos de Procurador General y Procuradores adjuntos, lo cual se considera pertinente que se incorpore, no solo para los altos funcionarios de la institución sino para todo el personal debido a que también le son aplicables. Y en el caso del Procurador se establezca una disposición respecto de impedimentos que sean inherentes al cargo, lo cual también se incluirá en el documento que integra las observaciones.

La **Iniciativa 5154** propone dos Procuradores Adjuntos, para que cualquiera de ellos pueda substituir al Procurador General de la Nación en caso de necesidad.

La **Iniciativa 5156** propone un Procurador General Adjunto y menciona como procurador al Procurador de la Niñez y la Adolescencia.



000001-134

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Al respecto, se recibieron observaciones de las entidades mencionadas en el apartado de Antecedentes, a las que se les compartió las Iniciativas, en el sentido que llama a confusión el hecho que se consigne en la ley, la figura de un Procurador General Adjunto y a su vez un Procurador de la Niñez y la Adolescencia, puesto que se considera que debe denominársele como Procurador General, únicamente al funcionario que dirige la institución, y que las otras dependencias se les denomine de acuerdo a su función.

En ese sentido, se toma en cuenta la terminología empleada por el artículo 108 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que creó la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia como dependencia dentro de la Procuraduría General de la Nación. No obstante lo anterior, es preciso aclarar que dicha dependencia realiza actividades de abogacía, que pueden ser atendidas a nivel de una Dirección por lo que es pertinente mencionarlo en el texto normativo de manera que se evite la confusión y se considere que se trata de dos procuradores adjuntos dentro de la misma institución.

Por otra parte, se considera pertinente la creación del Procurador General Adjunto que pueda suplir la ausencia del titular de la entidad por causas temporales o definitivas, de manera que no se desatiendan las funciones de la institución.

4. PROCURADURÍA

Respecto del área de Procuraduría (área procesal), la **Iniciativa 5156** (artículos 5 al 8), establece situaciones especiales para las cuales no será necesario acudir a la autorización del Presidente o Ministerio de Estado para su aprobación, como si ocurre con las disposiciones del Decreto número 512 del Congreso, salvo el caso de la transacción, únicamente se requerirá la autorización del Procurador General de la Nación. Dicho aspecto es congruente con la autonomía de funciones que propone, y hace más ágil la actuación. Sin embargo, en el caso de la transacción remite a la autorización del Presidente de la República, por lo que se considera que la redacción debe modificarse en el sentido de mencionar que lo hará en Consejo de Ministros. En este caso, esta disposición se consideraría una excepción a la regla, debido a que la figura implica concesiones recíprocas entre las partes.



00606-135

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Asimismo, la referida Iniciativa establece aspectos comunes necesarios para la actuación en los procesos que debe atender la Procuraduría General de la Nación en defensa del Estado, tales como:

- No condena en costas al Estado.
- No exigencia de garantías o fianzas.
- Exime de multas a los mandatarios.
- Extensión gratuita de certificaciones, copias y otros documentos por entidades públicas.

Los cuales ubica en los primeros artículos de la Iniciativa 5156 y que se considera pertinente reubicar en sección específica en la parte procesal, como quedará indicado en el proyecto integrado.

Asimismo, de las observaciones recibidas en la Comisión, para evitar confusión se debe modificar la denominación de la Dirección de Procuraduría que propone la iniciativa, por la de Dirección de Abogacía.

5. ASESORÍA Y CONSULTORÍA

El artículo 252 de la Constitución Política de la República, que en lo conducente estatuye: "La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. ...".

De conformidad con dicha norma, se atribuye en forma explícita a la Procuraduría General de la Nación, la función de brindar asesoría y consultoría a los órganos y entidades estatales, en general, por lo que la institución por disposición constitucional es el ente asesor de todo el Estado, integrado por sus diferentes organismos y entidades, puesto que la Constitución no lo limita.

Relacionado con lo anterior, la Iniciativa 5156 (artículos 1, 2, 3, 40, y 41), es congruente con la norma constitucional antes citada, puesto que utiliza la misma terminología al referirse a la función de consultoría de los órganos y entidades estatales, y únicamente se encuentra alguna mención de ministerios de Estado en algunas disposiciones, como el artículo 41, que pueden corregirse incluyendo lo indicado por la Constitución, por lo que se considera está propuesta acorde con la norma constitucional.



00000136

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Asimismo, dicha Iniciativa conserva en parte el sistema actual, mediante Visto Bueno de la Procuraduría a los dictámenes que emitan otras dependencias de Estado que lo requieran.

De acuerdo con el profesor Hugo Calderón¹, las asesorías jurídicas se desarrollan a través del dictamen, dependiendo de la clase que sea, obligatorio, facultativo o vinculante.

El dictamen facultativo será aquel en que el funcionario no está obligado a requerirlo, puesto que la ley no lo establece así; el dictamen obligatorio, será aquel en el que el consultante está obligado a solicitarlo por disposición de la ley aunque no está obligado a acatarlo y el dictamen vinculante, aquel en que existe obligación de solicitarlo y de acatarlo.

En la legislación guatemalteca se utilizan mayormente los dictámenes facultativos, y se encuentran regulados algunos obligatorios en cuanto a su solicitud, tal el caso de la audiencia a la Procuraduría General de la Nación que establecen algunas leyes como la Ley de lo Contencioso Administrativo, las cuales se evacúan mediante una opinión o dictamen, pero no se observan los de efecto vinculante de ambas vías, es decir, en su solicitud y en su acatamiento.

Al respecto, el artículo 252 constitucional no le atribuye dicho efecto a la asesoría que se preste a través de dictámenes y esto es así, porque la función de asesoría y consultoría, es una función de orientación, consejo, interpretación de normas, pero no substituye la decisión de quien solicita el dictamen, como ocurriría si se admite el efecto vinculante, con lo cual se afectaría todo el ordenamiento jurídico que establece la responsabilidad y competencia de funcionarios y empleados públicos, trasladándola a un ente asesor, el cual además no contaría con los elementos físicos, materiales y presupuestarios para atender tales tareas, lo que lo haría inviable.

Por ello, la **Iniciativa 5156** se considera más adecuada, en cuanto propone en el artículo 44 que los dictámenes no tengan efecto vinculante. Así también no obliga a solicitar la consulta o el Visto Bueno a la Procuraduría, en todos los casos, sino únicamente en aquellos que no correspondan a funciones sustantivas de quien consulta, en este caso se considera que debiera indicarse que podrá solicitarse la

¹ Calderón, Hugo, Derecho Administrativo, Parte Especial, Tomo II, Pág.87.



00000137

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

opinión cuando no corresponda a situaciones rutinarias o administrativas internas del órgano o entidad estatal que consulte.

Con relación a aspectos de procedimiento que inciden en el desarrollo de la función de asesoría y consultoría es de destacar que la **Iniciativa 5154**, establece la Inhibitoria de funcionarios de asesoría y consultoría, el procedimiento en caso de desacuerdo entre asesores y la sustitución del consultor, que tienen su antecedente en el Decreto número 512 del Congreso, por lo que se considera que tales disposiciones es pertinente que se incorporen al proyecto integrado.

6. RÉGIMEN LABORAL

Respecto de las relaciones laborales de la Procuraduría General de la Nación con sus trabajadores, la **Iniciativa 5156**, en el artículo 52, establece que se regularán además de lo dispuesto por la Constitución Política de la República, por su propio régimen de recursos humanos y su reglamento de trabajo los que serán emitidos por el Procurador General de la Nación, lo cual es congruente con la independencia funcional y administrativa que está proponiendo. Sin embargo, se considera pertinente se incluya en la ley, lo indicado en el artículo 41 de la **Iniciativa 5154**, respecto de sanciones, de manera que se incorpore al texto de la misma el régimen disciplinario, estableciendo las bases y el marco general que se aplicará a los trabajadores en el caso incurran en alguna falta laboral, por lo que se agrega en el texto del proyecto integrado las faltas y sus correspondientes sanciones, sin perjuicio que para aspectos de procedimiento se remita al reglamento respectivo.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Esta comisión, al hacer el análisis respectivo con las leyes citadas, respecto de las **Iniciativas 5154 y 5156**, considera que aunque con terminología diferente existe coincidencia en el fondo de varias de sus disposiciones. Sin embargo, por las razones apuntadas en el presente dictamen deben efectuarse modificaciones e integrarse en un solo proyecto que incorpore los aportes de ambas **Iniciativas**, más las observaciones que se hicieron llegar a esta Comisión.



Dictamen 01-2017

00606.138

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Asimismo, se considera importante y necesario dotar a la Procuraduría General de la Nación de una ley orgánica que dé cumplimiento al mandato constitucional y le permita llevar a cabo sus funciones con eficiencia, con un marco legal actualizado.

DICTAMEN

En atención a los antecedentes relacionados, análisis y consideraciones realizadas, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales con fundamento en los artículos emite DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES a las Iniciativas de Ley Números 5154 y 5156, por constituir un proyecto de Decreto viable, oportuno, necesario y constitucional.

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, en la ciudad de Guatemala el día 17 de mayo de 2017.

Fidel Reyes Lee
Vicepresidente

Firmado el 24/05/2017

Ronald Estuardo Arango Ordoñez

Cornelio Gonzalo García García
Presidente

Mayra Alejandra Carrillo De León
Secretaria

Leonardo Camey Curup



Dictamen 01-2017

00000139

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*


Javier Alfonso Hernández Franco


Juan Ramón Lau Quan


Juan José Porrás Castillo


Ana Victoria Hernández Pérez

Fernando Linares Beltranena

DECRETO NÚMERO _____
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, y su fin supremo es la realización del bien común, teniendo como deber primordial el garantizar a los habitantes de la república la libertad, la justicia, la seguridad y el desarrollo integral.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 251 y 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala en vigor, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, son instituciones independientes, con funciones específicas y diferenciadas, por lo que ordena la emisión de una Ley Orgánica para cada una de ellas.

CONSIDERANDO:

Que actualmente la Procuraduría General de la Nación se rige por el Decreto número 512 del Congreso de la República, que data del año 1948, que regulaba la organización y funcionamiento del Ministerio Público antes de las reformas constitucionales de 1993, y que preceptuaba en forma unificada, tanto las funciones correspondientes al ejercicio de la acción penal pública, como las de asesoría y consultoría del Estado. En tal sentido, resulta necesario emitir una Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 252 constitucional estableciendo la organización y funcionamiento de la Institución, de manera que se desarrollen las funciones de la entidad y del Procurador General de la Nación en forma eficiente.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a) y con base en lo que establecen los artículos 134 y 237 todos de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

La siguiente:

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CAPÍTULO I

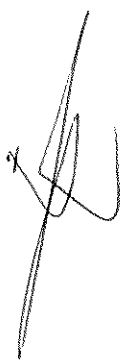
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la organización de la Procuraduría General de la Nación y desarrollar las funciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes le asignan.

Artículo 2. Naturaleza Jurídica. La Procuraduría General de la Nación es una Institución de derecho público y de orden constitucional; de conformidad con esta ley, goza de independencia funcional, técnica, financiera, administrativa y de criterio, con funciones autónomas.

La sede de la entidad se ubica en la Ciudad de Guatemala, y podrá establecer delegaciones en el territorio de la República.

Artículo 3. Funciones. La Procuraduría General de la Nación, tiene como funciones principales:

- 
- a) Brindar asesoría y consultoría jurídica a los órganos y entidades estatales;
 - b) Representar y defender los intereses del Estado;
 - c) Representar al Estado en el otorgamiento y suscripción de actos y contratos en los que éste tuviere interés;
 - d) Representar provisionalmente a los ausentes y personas declaradas en estado de interdicción, mientras éstos no tengan representante legal conforme a la legislación vigente;
 - e) Representar provisionalmente a los menores de edad, mientras éstos no tengan representante legal conforme a la legislación vigente; y,
 - f) Intervenir ante los órganos jurisdiccionales en todos aquellos asuntos en que esté llamada a hacerlo por disposición de la ley.


En el ejercicio de estas funciones, la Procuraduría General de la Nación perseguirá la realización de la justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad en los términos que la ley establece; actuará independientemente, por propio impulso, sin subordinación a ninguno de los Organismos del Estado, ni autoridad alguna, salvo lo establecido en esta ley.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

SECCIÓN PRIMERA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 4. Organización General. Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación se organiza de la forma siguiente:

- 
- a) Procurador General de la Nación.
 - b) Procurador General Adjunto.
 - c) Secretaría General.
 - d) Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia.
 - e) Dirección de Abogacías.
 - f) Dirección de Jurisdicción Voluntaria.
 - g) Dirección de Consultoría.
 - h) Dirección de Delegaciones Departamentales.
 - i) Dirección Administrativa.
 - j) Dirección Financiera.
 - k) Dirección de Recursos Humanos.
 - l) Dirección de Planificación.
 - m) Dirección de Auditoría Interna.
 - n) Otras dependencias que se creen.

Las Direcciones contarán adicionalmente con departamentos, unidades y secciones administrativas que sean necesarias y que les permitan cumplir con sus atribuciones en el ámbito de su competencia.

Las calidades de los titulares y las atribuciones de las Direcciones Administrativa, Financiera, de Recursos Humanos, Planificación y Auditoría Interna, entre otras, serán desarrolladas en el reglamento interno; los titulares de dichas direcciones serán de libre nombramiento y remoción por el Procurador General de la Nación.

Asimismo, en caso de ausencia o falta temporal de alguno de los Directores, se suplirán por el funcionario de la Institución que determine el Procurador General de la Nación.

Artículo 5. Otras Dependencias. El Procurador General de la Nación tendrá facultad para crear, modificar o suprimir otras direcciones, departamentos, abogacías, delegaciones, subdelegaciones, unidades o secciones, que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones que le asigna la ley.


SECCIÓN SEGUNDA PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Artículo 6. Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación, es el Jefe de la Procuraduría General de la Nación, dirige la Institución y ejerce la representación del Estado.

Artículo 7. Nombramiento. El Procurador General de la Nación será nombrado por el Presidente de la República y será designado para un período de cuatro años.

Artículo 8. Calidades. Para ser Procurador General de la Nación se deberá cumplir con los requisitos preceptuados en la Constitución Política de la República de Guatemala, y gozará de las mismas preeminencias e inmunidades que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 9. Impedimentos. Son causas de impedimento para ser nombrado Procurador General de la Nación:

- 
- a) Ser parte o tener interés en algún litigio contra el Estado.
 - b) Ser abogado director o procurador en procesos judiciales o acciones presentadas contra el Estado de Guatemala.
 - c) Ser pariente dentro de los grados de ley de:
 - 1. El Presidente o Vicepresidente de la República;
 - 2. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y,
 - 3. El Presidente y diputados que integran la Junta Directiva del Congreso de la República.

Artículo 10. Sustitución. En los casos de ausencia temporal o definitiva, renuncia, remoción o suspensión del Procurador General de la Nación, lo sustituirá el Procurador General Adjunto, quien desempeñará las funciones mientras retorna el titular o se nombra y toma posesión el funcionario que terminará el período constitucional de su antecesor, cuando la ausencia sea permanente.


Artículo 11. Suspensión y remoción. El Presidente de la República podrá remover al Procurador General de la Nación por causa justa debidamente establecida.

En caso de que el Procurador General de la Nación sea investigado por la posible comisión de un delito, éste será suspendido del cargo, sin goce de salario, cuando se le dicte el auto de prisión preventiva o medida sustitutiva por juez competente. La condena mediante sentencia debidamente ejecutoriada, por cualquier delito es causa justificada para la remoción del cargo.

Si el proceso fuere sobreseído, desestimado, archivado, se decretare la falta de mérito, o la sentencia fuere absolutoria, será restituido en el cargo y se le pagarán los salarios dejados de percibir durante la suspensión.


En otros casos, el Procurador General de la Nación podrá impugnar en la vía incidental ante la Corte Suprema de Justicia, la causa de remoción que se le haya notificado.


Artículo 12. Atribuciones. El Procurador General de la Nación, es la máxima autoridad de la Institución y tiene las siguientes atribuciones:

- 
- a) Ejercer la representación del Estado;
 - b) En casos específicos, delegar la representación a través de acuerdos o mandatos en las siguientes personas:
 - 1. En el Procurador General Adjunto;
 - 2. En uno o más abogados colegiados activos, para el ejercicio de acciones judiciales y administrativas específicas, conforme las atribuciones que para cada caso, se les otorgue por escrito y deban ser atendidas de manera especial, quienes deberán rendir un informe detallado al concluir su mandato;
 - 3. Delegar el ejercicio de la acción de extinción de dominio en representación del Estado, en el agente fiscal del Ministerio Público designado.
 - 4. En otros funcionarios de la institución o de dependencias del Estado cuando las circunstancias lo requieran.

No obstante lo anterior, el Procurador General de la Nación, podrá intervenir personalmente en los asuntos en que hubiese delegado la representación o nombrado mandatario y revocar los mandatos o acuerdos conferidos;

- c) Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado y promover la ejecución de lo resuelto;

- 
- d) Asesorar, opinar y dictaminar a requerimiento de los órganos y entidades estatales, por sí mismo o a través de las dependencias correspondientes de la institución;
 - e) Otorgar el visto bueno de la institución, cuando proceda, a los dictámenes que emitan las asesorías jurídicas de los órganos y entidades estatales que cuenten con ellas;
 - f) Aprobar o emitir los acuerdos y reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento de la institución;
 - g) Remitir para su información al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, dentro de los tres primeros meses del año, la memoria de labores de la institución, correspondiente al año anterior, y publicarla en la página web de la entidad para información de los ciudadanos en general.
 - h) Intervenir en los procesos promovidos en contra de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, que puedan conllevar responsabilidad civil subsidiaria y/o solidaria del Estado;
 - i) Velar porque los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación desempeñen su cargo y deducirles las responsabilidades en que puedan incurrir de conformidad con la ley;
 - j) Nombrar, trasladar y remover a los funcionarios, directores, jefes, abogados y demás personal de la Institución;
 - k) Aprobar a propuesta de las dependencias competentes de la Institución, el Reglamento de Clasificación de Puestos y Salarios y plan de carrera del personal de la misma;
 - l) Aprobar los manuales de la Institución, así como sus revisiones y actualizaciones periódicas;
 - m) Crear, modificar o suprimir los puestos de la Institución que fueren necesarios, así como ubicar o reubicar al personal en las diferentes dependencias;
 - n) Requerir informes a todos los funcionarios públicos, instituciones o personas, quienes están obligados a rendirlos en el plazo que se les fije, debiendo prestar toda la colaboración requerida al Procurador General de la Nación para el cumplimiento de sus funciones;
 - ñ) Aplicar el régimen disciplinario de la Institución, conforme las leyes vigentes, el reglamento de trabajo de la Procuraduría General de la Nación y demás normativa aplicable;
 - o) Requerir para análisis por sí o por su mandatario, sin ningún tipo de limitación, actuaciones o expedientes de la administración pública en el que medien intereses del Estado;

- 
- p) Accionar, gestionar y reclamar ante las dependencias y tribunales correspondientes; cuando considere que se lesionan intereses del Estado, consultará al órgano o entidad estatal correspondiente, y transcurrido el plazo de 15 días sin haber obtenido respuesta, promoverá las acciones y reclamaciones según su propio criterio y de conformidad con la ley;
 - q) Promover las acciones e interponer los recursos pertinentes, contra todo acto o resolución según convenga a los intereses del Estado en ejercicio de la representación que le confiere la ley;
 - r) Prestar declaración de parte o confesión judicial en representación del Estado, conforme lo establece esta ley;
 - s) Celebrar transacciones conforme lo dispuesto en la presente ley, siempre que no se perjudiquen los intereses del Estado;
 - t) Gestionar y suscribir convenios de cooperación con entidades del sector público o privado, así como entidades nacionales o extranjeras con el objeto de fortalecer los procesos sustantivos, administrativos y financieros de la Institución;
 - u) Aprobar el plan operativo anual de la entidad;
 - v) Remitir al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, el proyecto de presupuesto anual de la institución en la forma y plazo que establecen las leyes respectivas; y,
 - w) Coordinar y fiscalizar las dependencias de la Institución.

SECCIÓN TERCERA PROCURADOR GENERAL ADJUNTO

Artículo 13. Nombramiento. El Procurador General Adjunto será nombrado por el Procurador General de la Nación de quien dependerá. Dicho cargo es de libre nombramiento y remoción.


Artículo 14. Calidades. El Procurador General Adjunto, deberá ser abogado y notario, colegiado activo y contar con las mismas calidades, requisitos y prerrogativas que se requieren para ser Procurador General de la Nación.

Artículo 15. Impedimentos. Al Procurador General Adjunto le son aplicables las mismas causas de impedimento para ser nombrado, que se establecen para el Procurador General de la Nación.

Artículo 16 Atribuciones. El Procurador General Adjunto tiene las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al Procurador General de la Nación, en casos de ausencia temporal o definitiva mientras se designa al nuevo titular del Despacho;
- b) Velar por el cumplimiento de las instrucciones dictadas por el Procurador General de la Nación respecto de las distintas dependencias de la Institución;
- c) Ejercer la representación del Estado cuando ésta le sea delegada por el Procurador General de la Nación;
- d) Preparar los informes, estudios y asuntos específicos que le solicite el Procurador General de la Nación;
- e) Acompañar al Procurador General de la Nación o bien asistir en su representación, a reuniones, mesas técnicas u otras de cualquier naturaleza interna o externa; y,
- f) Cumplir las funciones generales o específicas que le sean delegadas por el Procurador General de la Nación.

SECCIÓN CUARTA SECRETARÍA GENERAL



Artículo 17. Nombramiento. La Secretaría General, estará a cargo del Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, será nombrado por el Procurador General de la Nación de quien dependerá. Dicho cargo es de libre nombramiento y remoción.

Artículo 18. Calidades. El Secretario General deberá ser abogado y notario, guatemalteco, colegiado activo, de reconocida honorabilidad y con al menos diez años de ejercicio profesional.

Artículo 19. Atribuciones. El Secretario General ostenta la fe pública de la Institución, dirige la actividad técnica y administrativa de la dependencia, supervisa al personal asignado y tiene las siguientes atribuciones:

- a) Refrendar acuerdos y resoluciones que dicte el Procurador General de la Nación, así como extender las certificaciones y constancias y legalizar firmas y documentos administrativos de la Institución;
- b) Faccionar actas a requerimiento del Procurador General de la Nación;
- c) Recibir y clasificar la documentación oficial que ingrese a la Institución, trasladándola en forma inmediata a la dependencia que corresponda, debiendo llevar registro y control de la misma;
- d) Llevar los registros y archivos que correspondan a la Secretaría General;

- e) Poner en conocimiento del Procurador General de la Nación, bajo su estricta responsabilidad los casos de impacto que afecten los intereses del Estado; y,
- f) Las demás atribuciones que el Procurador General de la Nación le asigne.

SECCIÓN QUINTA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Artículo 20. Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia. Tiene a su cargo la protección, promoción y representación de los derechos e interés superior de los niños, niñas y adolescentes, propiciando el ejercicio y disfrute de sus derechos, conforme lo establece la Constitución Política de la República, los tratados, convenios y pactos internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala y demás leyes aplicables, mientras no tengan representante legal.

Para efectos de organización institucional, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia será una Dirección.

Artículo 21. Nombramiento. El titular de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia será nombrado y dependerá del Procurador General de la Nación. Dicho cargo es de libre nombramiento y remoción. Será el jefe inmediato de las delegaciones departamentales únicamente en lo relacionado con niñez y adolescencia.

Artículo 22. Calidades. El titular de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia deberá tener las mismas calidades que se necesitan para ser Magistrado de la Corte de Apelaciones y contar con experiencia comprobable en temas de niñez.

Artículo 23. Atribuciones. El titular de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia dirige la actividad técnica y administrativa de la dependencia, supervisa al personal asignado y tiene las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la representación legal de los niños, niñas y adolescentes que carecieren de ella;
- b) Velar por la protección legal y defensa de los intereses de la niñez y la adolescencia cuando sus derechos hayan sido vulnerados;
- c) Coordinar las acciones relacionadas con niñez y adolescencia, a cargo de las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales de la Institución;
- d) Dirigir, coordinar y supervisar las acciones que realice la Unidad Operativa de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta ALBA-KENETH;
- e) Coordinar operaciones, proyectos y programas con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia; y


- f) Las demás, que le sean asignadas por parte del Procurador General de la Nación.

SECCIÓN SEXTA DIRECCIÓN DE ABOGACÍAS

Artículo 24. Nombramiento. El Director de Abogacías será nombrado y dependerá del Procurador General de la Nación. Dicho cargo es de libre nombramiento y remoción.

Artículo 25. Calidades. El Director de Abogacías deberá ser abogado y notario, colegiado activo y tener las mismas calidades que se necesitan para ser Magistrado de la Corte de Apelaciones.

Artículo 26. Atribuciones. El Director de Abogacías dirige la actividad jurídica, técnica y administrativa de las Abogacías del Estado, supervisa al personal asignado y tiene las siguientes atribuciones:

- 
- a) Poner en conocimiento del Procurador General de la Nación, bajo su estricta responsabilidad los casos de impacto que afecten los intereses del Estado;
 - b) Cooperar con el Procurador General de la Nación en el estudio de los asuntos y orientar la preparación de los memoriales, demandas o alegatos que aquél le encomiende;
 - c) Velar porque las Abogacías del Estado cumplan con defender los intereses del Estado según la materia que corresponda;
 - d) Velar por la unificación de criterios para el planteamiento de las diferentes acciones en defensa de los intereses del Estado;
 - e) Rendir los informes que solicite el Procurador General de la Nación sobre los asuntos que se estén conociendo en la dependencia;
 - f) Tener a su cuidado inmediato la adecuada tramitación de los negocios y asuntos que se diligencien en la Dirección a su cargo,
 - g) Velar porque todas las gestiones se ejecuten dentro de los plazos legales;
 - h) Coordinar la estrategia de litigio de los casos que se tramiten, en defensa de los intereses del Estado; y,
 - i) Cualquier otra que le asigne el Procurador General de la Nación.

Artículo 27. Abogacías del Estado. Los abogados en quienes se haya delegado la representación del Estado, actuarán en los diferentes procesos judiciales en que éste sea parte procesal.

Las Abogacías del Estado comprenderán, entre otras, las siguientes:

- a) Abogacía de Asuntos Constitucionales;
- b) Abogacía de lo Contencioso Administrativo;
- c) Abogacía del Área Laboral;
- d) Abogacía del Área Penal;
- e) Abogacía del Área Civil;
- f) Abogacía de Medio Ambiente; y,
- g) Abogacía de Extinción de Dominio.

Artículo 28. Atribuciones. Cada abogacía del Estado contará con un titular, quien dirige la actividad técnica y administrativa de la dependencia, supervisada al personal asignado de acuerdo a las siguientes atribuciones:

- a) Poner en conocimiento del Director de Abogacías, bajo su estricta responsabilidad de las gestiones que ejecuten y de los resultados de los casos de impacto que afecten los intereses del Estado;
- b) Defender los intereses del Estado de Guatemala, según la materia que corresponda;
- c) Intervenir como sujeto procesal en las controversias que planteen los particulares contra la administración, y como actor cuando se ejerciten acciones de nulidad, rescisión, resolución e incumplimiento de contratos administrativos, previa instrucción del Procurador General de la Nación;
- d) Intervenir en los procedimientos administrativos y judiciales en los que el Estado tenga interés;
- e) Intervenir en los procesos de jurisdicción voluntaria cuando se conviertan en contenciosos y medien intereses del Estado;
- f) Promover acciones y evacuar audiencias en defensa de los intereses del Estado;
- g) Participar en las audiencias y vistas de los procesos a su cargo;
- h) Analizar los expedientes y emitir opiniones o providencias en los asuntos de su competencia;
- i) Cooperar y coordinar acciones entre las Abogacías del Estado, que integran la Procuraduría General de la Nación, en búsqueda de defender los intereses del Estado; y
- j) Las demás atribuciones que el Procurador General de la Nación le designe.

SECCIÓN SÉPTIMA
DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Artículo 29. Nombramiento. El Director de Jurisdicción Voluntaria será nombrado y dependerá del Procurador General de la Nación. Dicho cargo es de libre nombramiento y remoción.

Artículo 30. Calidades. El Director de Jurisdicción Voluntaria deberá ser abogado y notario, colegiado activo y tener las mismas calidades que se necesitan para ser Magistrado de la Corte de Apelaciones.

Artículo 31. Atribuciones. El Director de Jurisdicción Voluntaria tiene las siguientes atribuciones:

- a) Velar por la uniformidad y congruencia en la emisión de los dictámenes de jurisdicción voluntaria;
- b) Llevar una compilación de los dictámenes de jurisdicción voluntaria debidamente clasificada por materias y evitar que se emitan dictámenes contradictorios o que discrepen entre sí, al respecto de casos análogos;
- c) Remitir el duplicado de los dictámenes de jurisdicción voluntaria a la Secretaría General de la Institución para su sistematización y actualización; y,
- d) Cualquier otra que le asigne el Procurador General de la Nación.



SECCIÓN OCTAVA

DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA

Artículo 32. Nombramiento. El Director de Consultoría será nombrado y dependerá del Procurador General de la Nación. Dicho cargo es de libre nombramiento y remoción.

Artículo 33. Calidades. El Director de Consultoría deberá ser abogado y notario, colegiado activo y tener las mismas calidades que se necesitan para ser Magistrado de la Corte de Apelaciones.

Artículo 34. Atribuciones. El Director de Consultoría dirige la actividad jurídica de asesoría y consultoría, la administración de la dependencia, la supervisión del personal asignado y tiene las siguientes atribuciones:

- a) Evacuar las audiencias que le sean conferidas a la Procuraduría General de la Nación, en el trámite de los recursos administrativos de revocatoria y reposición, de conformidad con la Ley de lo Contencioso Administrativo;
- b) Otorgar visto bueno cuando corresponda, a los dictámenes jurídicos emitidos por las Asesorías Jurídicas de los órganos o entidades estatales que éstas remitan a la institución; y,


- c) Emitir dictámenes jurídicos a los órganos y entidades estatales, que por carecer de asesoría jurídica lo soliciten.

Artículo 35. Ejercicio de la Consultoría. Ejercerán la consultoría el Procurador General de la Nación, el Procurador General Adjunto, cuando esté en funciones de Procurador General, el Director y los abogados de Consultoría de la institución, los abogados consultores adscritos a los órganos, entidades, ministerios y dependencias del Estado y cualesquiera otros abogados que llame el Procurador General, para dictaminar en casos específicos.

Los órganos y entidades estatales que requieran opinión consultiva de carácter jurídico, lo trasladarán primero a su Asesoría Jurídica, la que emitirá el dictamen correspondiente y luego lo remitirán a la Procuraduría General de la Nación para determinar la procedencia o no del visto bueno de la Institución, siempre que dichos dictámenes no correspondan al ámbito de las funciones administrativas del solicitante.

Si un dictamen no amerita su aprobación, la Procuraduría General de la Nación, expresará las razones por las que discrepa del punto o puntos de inconformidad y emitirá pronunciamiento sobre el caso, el cual remitirá al órgano o entidad estatal solicitante.

En caso, los asuntos sometidos a consideración de la Procuraduría General de la Nación, no correspondan a materia de consultoría jurídica se abstendrá de emitir opinión alguna, informándole de tal extremo a quien haya efectuado la solicitud.

 **Artículo 36. Sustitución de Abogado Consultor.** Cuando el abogado consultor llamado a dictaminar en un asunto tenga impedimento o excusa, el Director de Consultoría, sin formar artículo, designará a cualquier otro o dictaminará personalmente. En caso sea el Director de Consultoría el que tenga impedimento o excusa, el Procurador General de la Nación resolverá lo que corresponda.

Artículo 37. Deber de Colaboración. El Procurador General de la Nación, para casos especializados y concretos, podrá designar para emitir dictamen o revisar uno de ellos, a un abogado especialista, previo pacto de honorarios. Los honorarios se regularán en el reglamento respectivo.

Artículo 38. Efectos del Dictamen u Opinión. Los dictámenes y opiniones emitidos por la Dirección de Consultoría versarán sobre el trámite legal del expediente, la interpretación, integración o aplicación de las normas legales o de otro orden jurídico, así como las recomendaciones cuando corresponda, sin que el pronunciamiento tenga efectos vinculantes.

Artículo 39. Uniformidad y congruencia de dictámenes. El Director de Consultoría, velará por la uniformidad y congruencia en la emisión de los dictámenes, llevará una compilación de los mismos debidamente clasificada por materias y evitará que se emitan dictámenes contradictorios o que discrepen entre sí, en casos análogos o similares.

Artículo 40. Registro de los criterios institucionales. La Dirección de Consultoría está obligada a remitir el duplicado de los dictámenes que emita, a la Secretaría General de la Institución para su sistematización y actualización.

SECCIÓN NOVENA DIRECCIÓN DE DELEGACIONES DEPARTAMENTALES

Artículo 41. Nombramiento. El Director de Delegaciones Departamentales será nombrado y dependerá del Procurador General de la Nación. Dicho cargo es de libre nombramiento y remoción. Será el jefe inmediato de los Delegados Departamentales, salvo lo relacionado a niñez y adolescencia.

Artículo 42. Calidades. El Director de Delegaciones Departamentales deberá ser abogado y notario, colegiado activo y tener las mismas calidades que se necesitan para ser Magistrado de la Corte de Apelaciones.

Artículo 43. Atribuciones. El Director de Delegaciones Departamentales coordina las acciones jurídicas y de funcionamiento con las diferentes delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales y las dependencias del área sustantiva, salvo lo relacionado a niñez y adolescencia, y área de apoyo administrativo, y tiene las siguientes atribuciones:

- a) Coordinar que las distintas delegaciones cumplan en sus respectivas circunscripciones territoriales, con defender los intereses del Estado según la materia que corresponda;
- b) Velar porque el análisis jurídico de los expedientes de jurisdicción voluntaria se haga con fundamento en los criterios unificados de la Institución;
- c) Realizar visitas a las delegaciones departamentales para verificar el funcionamiento y determinar las necesidades de las mismas;
- d) Propiciar el desarrollo de programas de capacitación y evaluación del desempeño del personal de las delegaciones departamentales; y
- e) Cualquier otra que le asigne el Procurador General de la Nación.

Artículo 44. Delegaciones Departamentales y Subdelegaciones Municipales. Las Delegaciones Departamentales representan y ejercen las funciones de la Procuraduría General de la Nación, en los departamentos en la que se encuentran localizadas; las subdelegaciones municipales lo hacen en los municipios.

SECCIÓN DÉCIMA
DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCESOS JUDICIALES Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN

Artículo 45. Notificaciones. Todas las notificaciones al Procurador General de la Nación como representante legal del Estado, se harán en la sede de la Procuraduría General de la Nación en la Ciudad de Guatemala, o sus delegaciones regionales, departamentales o municipales, según corresponda.

Las notificaciones que para contestación de demanda como parte o tercero interesado hubieren de hacerse al Procurador General de la Nación, se practicarán por medio de cédula, a la cual deberá acompañarse la copia o copias de ley. Transcurridos quince días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de la cédula de notificación, se considerará consumada la misma y empezará a correr el plazo fijado en la resolución respectiva.

El Procurador General de la Nación reglamentará el sistema de notificaciones, para su distribución interna.

Artículo 46. Impugnaciones. La Procuraduría General de la Nación podrá interponer los recursos e impugnaciones que establezca la ley.

Artículo 47. Desistimiento Total o Parcial. Quienes ejerzan la representación legal del Estado por delegación del Procurador General de la Nación, con carácter excepcional y previa autorización expresa de éste, con la justificación debida, podrán plantear:

1. El desistimiento total del proceso o de un recurso que afecte el fondo del asunto;
2. El desistimiento parcial de un recurso, incidente o excepción sobre puntos que no dan fin al proceso y sobre una prueba propuesta.


Artículo 48. Declaración de Parte del Estado. Cuando en cualquier clase de proceso judicial, se tenga interés en aportar como medio de prueba la declaración de parte o confesión judicial del Estado, el interesado presentará con la solicitud, el interrogatorio correspondiente. El juez, previa calificación del mismo, lo remitirá con oficio a la Procuraduría General de la Nación, para que lo conteste como informe por escrito, con la firma y sello de la entidad, dentro del plazo que le fije el

tribunal, que no podrá ser menor de ocho días ni mayor de quince días, contados a partir de la fecha en que reciba el interrogatorio la autoridad o funcionario correspondiente. Los tribunales en ningún caso podrán declarar confeso al Estado, pero éste tiene la obligación de rendir el informe requerido.

Todos los demás aspectos no indicados en el párrafo anterior, tales como forma de interrogatorio, calificación, forma de las respuestas y cualquier otro requisito, deberá estarse a las normas pertinentes del proceso dentro del cual sea promovido el medio de prueba relacionado.

Artículo 49. Transacción. Siempre que convenga a los intereses del Estado, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, mediante Acuerdo Gubernativo, podrá autorizar al Procurador General de la Nación a celebrar transacciones en representación del Estado, cuyo procedimiento se desarrollará en el Reglamento correspondiente.

Artículo 50. Costas Procesales. No se exigirán al Estado garantías o fianzas para el otorgamiento de medidas cautelares o precautorias, ni se le condenará en costas; tampoco podrá imponerse multas a los mandatarios o abogados que ejerzan dicha representación en defensa de los intereses del Estado y los abogados que los auxilien, por presumirse la buena fe en las actuaciones.



Artículo 51. Colaboración Gratuita. Los organismos del Estado y entidades públicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas y semiautónomas, registros públicos y tribunales de justicia, están obligados a extender de forma gratuita certificaciones, informes, fotocopias, oficios, exhortos, despachos, suplicatorios, requerimientos y mandamientos de ejecución, que le sean requeridos por la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de las funciones que le correspondan de conformidad con la ley.

Artículo 52. Obligaciones de los Funcionarios Públicos. Toda Institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquiera que maneje, administre o ejecute recursos públicos o bienes del Estado; así como cualquiera que realice actos de la administración pública en general, está obligado a proporcionar la información y documentación que le sea requerida por la Procuraduría General de la Nación, a través de sus funcionarios, en el plazo prudencial que para tal efecto le fije, para el planteamiento de demandas, denuncias o cualquier petición judicial.

Las entidades del Estado están obligadas a remitir con celeridad y bajo su estricta responsabilidad a la Procuraduría General de la Nación, juntamente con el

expediente administrativo, los medios de prueba y toda información que ésta estime necesaria para la defensa de los intereses del Estado.

Los órganos y entidades del Estado estarán obligados a cooperar en la práctica de diligencias que la Procuraduría General de la Nación necesite llevar a cabo en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 53. Asistencia a la víctima y no re-victimización. La Procuraduría General de la Nación, cuando haya derechos fundamentales y/o bienes en riesgo o vulnerados, de las personas cuya protección le ha sido encomendada por disposición legal, procurará evitar su re-victimización; para ello tomará las medidas previstas en la ley, promoviendo un trato humano hacia la víctima.

Artículo 54. Inhibitorias. Son causas de inhibitoria de los funcionarios y empleados, de la institución, para conocer en asuntos determinados, las mismas que para los jueces determina la Ley del Organismo Judicial, como causales de impedimento, excusa o recusación, así como tener parentesco dentro de los grados de ley con el Juez, Magistrado o funcionario ante quien deba ejercer su función. El impedimento o excusa se prueba mediante simple razón, que suscribirá y presentará el respectivo funcionario o empleado al Procurador General de la Nación o Director según corresponda, quienes los substituirán por el funcionario o empleado que determinen.

Artículo 55. Reserva. Las estrategias de litigio y los análisis de los casos que se someterán a juicio, que tengan a su cargo los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación constituyen información reservada con carácter excepcional.



CAPÍTULO III RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Artículo 56. Presupuesto. El proyecto de presupuesto de la Procuraduría General de la Nación se enviará anualmente al Organismo Ejecutivo para su conocimiento y al Congreso de la República para su aprobación e integración al Presupuesto General de la Nación. La ejecución del presupuesto estará sujeta a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado, conforme lo establece el artículo 237 de la Constitución Política de la República.

Artículo 57. Otras Fuentes de Financiamiento. La Procuraduría General de la Nación dispondrá de las fuentes adicionales de financiamiento siguientes:

- a) Ingresos que se adquieran por concepto de costas judiciales, derivados de los juicios en que interviene;

- b) Donaciones, herencias y legados sean nacionales o internacionales, de origen público o privado;
- c) Fondos de cooperación internacional;
- d) Fondos obtenidos de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio; y,
- e) Cualquier otro ingreso derivado de servicios que preste de conformidad con esta ley, su reglamento, leyes específicas o convenios internacionales e interinstitucionales.

Estos recursos constituirán fondos privativos de la Institución.

Artículo 58. Patrimonio. La Procuraduría General de la Nación tendrá patrimonio integrado por los bienes muebles e inmuebles adscritos, derechos y valores que posea a la emisión de esta ley y los que adquiera en el futuro por cualquier título.

CAPÍTULO IV RÉGIMEN LABORAL

Artículo 59. Relaciones Laborales. Las relaciones laborales de la Procuraduría General de la Nación con sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Guatemala, su propio régimen de administración de recursos humanos establecido en el Reglamento de Trabajo de la Institución, Reglamento de Clasificación de Puestos y Salarios, plan de carrera y sistema de evaluación, que serán aprobados por el Procurador General de la Nación, y supletoriamente por el Código de Trabajo, en lo que no se oponga a dichas normas.

Artículo 60. Prohibiciones. Al Procurador General de la Nación, Procurador General Adjunto y demás funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación le son aplicables las prohibiciones siguientes:

- a) Desempeñar otros cargos en otros órganos y entidades estatales o privadas durante el ejercicio de su función, con excepción del ejercicio de la docencia;
- b) Ejercer en forma liberal actividades profesionales, técnicas, ejecutivas o de asesoría;
- c) Promover actividades políticas o religiosas durante el ejercicio del cargo;
- d) Pertenecer a órganos directivos de partidos u organizaciones políticas;
- e) Ser contratista del Estado o de entidades que reciban, administren o inviertan fondos públicos, o socio de las mismas, o en los que el Estado delegue la administración, ejecución, supervisión de obras y servicios públicos y con quienes se tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios;

- f) Defender intereses de personas individuales o jurídicas que presten servicios públicos; y,
- g) Contratar, nombrar o designar en puestos de trabajo en la Procuraduría General de la Nación a personas con parentesco dentro de los grados de ley.
- h) Revelar información confidencial o reservada.

No podrán optar a un cargo en la Procuraduría General de la Nación, las personas que tengan alguna de las causales de impedimento para ejercer cargos o empleos públicos, que establece la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, y las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria por delitos contra la vida, delitos contra la libertad y la seguridad de la persona, delitos contra el patrimonio, delitos contra el régimen tributario, delitos contra el orden institucional y delitos contra la administración pública.

De igual manera, serán aplicables además, las prohibiciones que la citada ley establece para los funcionarios y empleados públicos.

Artículo 61. Responsabilidades. Los funcionarios y empleados de la institución son responsables conforme a la ley, por los delitos, faltas y omisiones en que incurran durante el ejercicio de sus cargos.


Artículo 62. Régimen disciplinario. El Procurador General de la Nación podrá imponer sanciones disciplinarias a funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación, por las faltas o prohibiciones en que incurran en el servicio.

Artículo 63. Faltas. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles, se consideran faltas las siguientes:

a) Faltas Leves:


1. La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada, siempre que no implique una falta de mayor gravedad conforme a esta ley.
2. La falta de respeto debido hacia el público, compañeros y subalternos en el desempeño del cargo, funcionarios judiciales, representantes de órganos auxiliares de la administración de justicia, y los abogados y notarios.
3. La negligencia en el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, siempre que la misma no constituya falta grave o muy grave.
4. El uso inapropiado de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles de la institución.

b) Faltas Graves:

- 
1. Ausencia o abandono injustificado a sus labores, o inobservancia reiterada del horario de trabajo, o ausencia injustificada de las oficinas donde se labora.
 2. Faltar a la debida celeridad en el trámite de los procesos o expedientes e incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o expedientes, ya sea en el ámbito procesal o administrativo.
 3. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos requieran reserva, ocasionando consecuencias graves para el desarrollo del proceso o expedientes, ya sea en el ámbito procesal o administrativo.
 4. La falta en el acatamiento de las instrucciones generales o específicas emitidas por el Procurador General de la Nación.
 5. Presentarse a trabajar o laborar en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes.
 6. La injuria, la calumnia o las vías de hecho en contra de jefes, funcionarios, representantes de la Procuraduría General de la Nación o cualquier otro trabajador.
 7. Causar intencionalmente daño o usar en provecho propio o de terceras personas, los bienes de la Procuraduría General de la Nación.
 8. Hacer durante el trabajo o dentro de las oficinas de la Procuraduría General de la Nación, actividades políticas partidistas o de proselitismo religioso.
 9. No comparecer a las audiencias señaladas ni evacuar en tiempo las etapas procesales correspondientes.
 10. No hacer uso adecuado de los sistemas informáticos establecidos para el funcionamiento institucional.

c) Faltas Muy Graves:

1. Desempeñar simultáneamente a la función, empleos o cargos remunerados, con excepción de la docencia, o prestar cualquier clase de servicio profesional.

- 
2. Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas en dinero o en especie, directa o indirectamente, en relación a cualquier procedimiento.
 3. Incumplir con los plazos procesales, ocasionando con ello daños y perjuicios a los intereses del Estado.
 4. Revelar o proporcionar información confidencial que conozca con ocasión de su cargo.
 5. Portar armas de cualquier clase durante la jornada de trabajo.
 6. Intervenir en cualquier acto procesal a sabiendas de que se encuentra en alguna causal de inhabilitación, o en alguna de las prohibiciones establecidas en la ley.
 7. Faltar a la verdad, en un proceso de contratación, calificación o ascenso señalando tener calidades, calificaciones académicas, historial disciplinario, experiencia profesional, condiciones o conocimientos que no se poseen; sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan. La circunstancia del ocultamiento o presentación de datos falsos no podrá ser saneada posteriormente por prescripción.
 8. Realizar una acción comprendida entre las prohibiciones establecidas en la presente Ley, salvo que constituya una falta específica.
 9. Ejercer la profesión de abogado litigando asuntos particulares por sí o por interpósita persona.
 10. Extraer fuera de los casos en que la ley lo autoriza, los expedientes y documentos fuera de la oficina en que deban estar, o de las de la Procuraduría General de la Nación.


Artículo 64. Sanciones. Las sanciones que se impongan serán conforme al tipo de falta cometida, las siguientes:

- a) Sanciones para faltas leves: Amonestación verbal o escrita.
- b) Sanciones para faltas graves: Suspensión de empleo o cargo sin goce de salario hasta por veinte (20) días.
- c) Sanciones para faltas muy graves: Suspensión desde veintiún (21) hasta noventa (90) días sin goce de salario o destitución.

La destitución del cargo o empleo, impide el reingreso de la persona a la Procuraduría General de la Nación.

La imposición de una sanción por falta grave o por tres faltas leves, impide el ascenso en la carrera e impone la limitación temporal de optar a becas dentro o fuera del país y optar a otros cargos dentro de la Institución, mientras no se haya cancelado la anotación en el expediente del sancionado. El Reglamento correspondiente establecerá el plazo para efectuar la cancelación de la referida anotación.

Artículo 65. Prescripción y Extinción de la Responsabilidad Administrativa. Las faltas establecidas en la presente Ley y las acciones que se pueden iniciar a raíz de las mismas, prescriben conforme a las siguientes reglas:

- 
- 1) La acción disciplinaria prescribe en seis (6) meses para las faltas leves, en un (1) año para las faltas graves y en dos (2) años para las faltas muy graves. En todos los casos el plazo se computa para las faltas consumadas desde el día de su consumación, y para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último acto. Cuando fueren varias las conductas conocidas en un solo procedimiento, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.
 - 2) La sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco (5) años, contados a partir de que la resolución se encuentre firme.

Constarán en los registros de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la Nación, las faltas que sean declaradas con lugar y sin lugar, sin perjuicio de los derechos laborales existentes.

Artículo 66. Procedimiento a establecer para el Régimen Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. En el Reglamento correspondiente, se dispondrá el procedimiento relativo a la aplicación del Régimen Disciplinario de la Institución.

CAPÍTULO V DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 67. Reglamentos. El Procurador General de la Nación, emitirá los reglamentos necesarios para la aplicación de la presente ley, dentro de los noventa días siguientes a la vigencia de la misma.

Artículo 68. Período de funciones del Procurador General de la Nación en ejercicio. El período para el cual fue nombrado el Procurador General de la Nación en funciones, concluirá el 18 de mayo de 2018.

Artículo 69. Interpretación y Denominación. Salvo en materia penal, procesal penal, penitenciaria, en la propia Ley Orgánica del Ministerio Público, en lo que corresponde a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y en toda norma legal o reglamentaria en que se mencione Ministerio Público, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 70. Disposiciones derogatorias. Se derogan el Decreto número 512 y sus reformas y el Decreto número 25-97, todos del Congreso de la República de Guatemala, así como cualquier otra disposición que se oponga o restrinja los preceptos contenidos en la presente Ley.

Artículo 71. Vigencia. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República y entra en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.



PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN,
PROMULGACIÓN SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA A LOS _____ DIAS DEL MES DE _____ DE 2017.

